AJUNTAMENT
D'ALBALAT DELS TARONGERS

CIF: P-46-01000-E
Plaça del Pla del Molí, 1
Telèfon 96 262 82 01 - Fax 96 262 86 13
46591 ALBALAT DELS TARONGERS
(VALÈNCIA)

alcaldia@albalatdelstarongers.net
www.albalatdelstarongers.es

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y PÚBLICA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2025.

SRA. ALCALDESA
Dña. M.ª DOLORES ASENSI FERRUS

SRES. CONCEJALES PRESENTES
DÑA. CARMEN BASTANTE LUJAN
DÑA. MARIA DOLORES LAFONT AVINENT
D. JUAN MAYORDOMO ZARCO
DÑA. Mª ANGELES REDON BLASO
DÑA. GISELA SAEZ VICENTE
D. CARLOS PICON MIR
DÑA. YOLANDA MARIN FURIO

CONCEJALAS AUSENTES
DÑA. TERESA PEREZ FURIO

SECRETARIA
DÑA. AMPARO FERRANDIS PRATS

Siendo las 20h del día de la fecha indicada, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento bajo la presidencia de la Sra. alcaldesa, se reúnen los/as Concejales/as que al margen se relacionan, que constituyen un quorum de asistencia de ocho de los nueve miembros que tanto de hecho como de derecho integran la Corporación, al objeto de celebrar sesión ordinaria y pública.

Por la Sra. alcaldesa se declara abierta la sesión pasando a tratar los asuntos que configuran el orden del día, tal y como se relacionan a continuación.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN CELEBRADA LOS DÍA 27 DE MARZO DE 2025.

Visto por el pleno el borrador del acta, informa la secretaria que existe un error material en el punto noveno último párrafo, en el sentido de que sólo existen 10 caminos en la Carretera de Segart, por lo que sobra el CAMI DE SEGART Nº 11; tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, su rectificación, siendo la identificación de los caminos del 1 al 10.

Seguidamente se aprueba por unanimidad el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 27 de marzo de 2025, con la rectificación del punto noveno.

SEGUNDO.- TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJALA DE DÑA. MARÍA ÁNGELES REDÓN BLASCO.

Por la secretaria – interventora se informa al pleno que se ha recibido la credencial expedida por la Junta Electoral Central en fecha 15 de abril de 2025 a favor de DÑA. Mª Ángeles Redón Blasco por estar incluida en la lista de candidatos presentados por el Partido Popular, en sustitución, por renuncia, de D. Luís Calvo Baguena.

Se informa que se ha presentado la declaración sobre causa de posible incompatibilidad y actividad, y bienes patrimoniales sin que exista causa de incompatibilidad o impedimento, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para adquirir la plena condición de concejala.

Por lo que por la secretaria-interventora se procede a la lectura de la fórmula establecida en el RD 707/1979, y la Sra. Mª Ángeles JURA por su conciencia y honor cumplir fielmente la obligación del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tomando posesión del cargo de concejala de este Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers.

TERCERO. ACUERDOS VARIOS, EN SU CASO, SOBRE ACTUACIONES A REALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 362/2024, INCOADO A INSTANCIA DE URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L, CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 8 DE JULIO DE 2024, DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DEL PLA EDIFICANT .

Por la secretaría interventora se informa al pleno que habiéndose emitido dictamen favorable por la comisión de urbanismo sobre la misma, se somete a su consideración el siguiente, INFORME SOBRE POSIBLE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DEL CONTRATO de las obras "construcción en la misma parcela y demolición del edificio existente del centre Tirant lo Blanc, CRA Baronia Baixa, incluido en el Pla Edificant" Expte: C0 1/2021 PAS; Y CONVENIENCIA DE INICIAR UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION CONTRACTUAL.

De conformidad con lo establecido en el artículo 173.1 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y Real Decreto 128/2018 por el que se regula el Régimen jurídico de los funcionarios de la administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, se emite informe jurídico sobre posible caducidad y conveniencia de iniciar un nuevo procedimiento en el expediente: CO 1/2021 PAS, " **obras de construcción en la misma parcela y demolición del edificio existente del centre Tirant lo Blanc, CRA Baronia Baixa, incluido en el Pla Edificant"** que se deducirá de los siguientes:

ANTECEDENTES

• El 4 de agosto de 2021, se adjudicó el contrato de obras 'construcción en la misma parcela y demolición del edificio existente del centre Tirant lo Blanc, CRA Baronia Baixa a URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L. (en adelante, "Urbamed") por importe de 1.412.218,57€, 1.708.784,47 € con IVA. Formalizándose el contrato el 24 de agosto de 2021.

• El 13 de junio de 2023, Rubén Bernabé Miñana, en representación de Urbamed presentó escrito en el que comunicó la paralización temporal total de las obras a partir del 15 de junio de 2023 y solicitaba la suspensión de la ejecución del contrato.

• El 30 de junio de 2023, se procedió a notificar a Urbamed el acuerdo adoptado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento en la sesión extraordinario del 27 de junio de 2023, de no aceptar la suspensión temporal de la obra y no acordar la suspensión del contrato, ante la falta de justificación documental de la imposibilidad de continuar la obra.

• Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers de 21 de agosto de 2023 se acordó iniciar el expediente de resolución del contrato, atendiendo al incumplimiento del plazo de finalización de las obras del contrato, así como la paralización total de la obra.

• Urbamed accedió a la notificación del acuerdo el 4 de septiembre de 2023.

• El 14 de septiembre de 2023, Urbamed presentó escrito de alegaciones, en el que se opuso a las causas de resolución invocadas en el acuerdo de inicio de resolución contractual, y en el que

por el contrario solicitó la resolución de dicho contrato por causas imputables a la Administración, en concreto la causa de resolución prevista en el art 211.1. g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ("LCSP").

• El 29 de diciembre de 2023, se emitió informe jurídico externo (en virtud de la su contratación por el Decreto de Alcaldia núm. 388/23), y se propuso la desestimación de las alegaciones de Urbamed y la resolución del contrato por causas imputable a ella.

• El 12 de enero de 2024, la Dirección Facultativa de las obras firmó un informe acerca de las alegaciones presentadas por Urbamed, junto con una cronología del desarrollo de las obras.

• El 12 de enero de 2024, el Informe de Secretaría sobre la propuesta de resolución del contrato concluyó que "no concurre la causa de resolución del contrato invocada por URBAMED en base al artículo 211.1g) y se propone la desestimación de las alegaciones presentadas por URBAMED, así como, a su pretensión de la resolución del contrato por causas imputables a la administración, por los fundamentos expuestos. Se propone, la resolución del contrato ante la paralización total de la obra, que faculta al Ayuntamiento a resolver el contrato por el incumplimiento de la obligación principal del contrato, construcción del edificio escolar, causa recogida en el artículo 211.1.f) de la LCSP".

• El 12 de enero de 2024, se solicitó por la Alcaldesa de Albalat dels Tarongers, de acuerdo con el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, "RGLCAP") dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, previo al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.

• El 1 de marzo de 2024, se comunicó a Urbamed que el expediente estaba a disposición del órgano Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana desde el 12 de enero de 2024, y que el procedimiento se había suspendido desde la solicitud hasta que dicho órgano se pronunciara.

• El 4 de marzo de 2024, Urbamed accedió a la notificación.

• El 27 de marzo de 2024, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana emitió su Dictamen núm. 193/2024, donde concluyó que "deben considerarse acreditadas la paralización de la ejecución de la obra y la negativa de la contratista a cumplir la obligación principal del contrato, lo que determina la concurrencia de la causa de resolución del artículo 211.1.f) de la LCSP".

• El dictamen fue recibido por el Ayuntamiento el 28 de marzo de 2024.

• El 12 de abril de 2024, se emitió propuesta de resolución de la Secretaria-interventora.

• El 15 de abril de 2024, el Pleno del Ayuntamiento de Albalat del Tarongers, acogiendo la propuesta de resolución anterior y reproduciendo su contenido, acordó entre otras cuestiones:

"PRIMERO. Comunicar a URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L que en fecha 28 de marzo de 2024 se reanudo el procedimiento, suspendido desde el 12 de enero de 2024.

SEGUNDO. Proponer desestimar las alegaciones presentadas el 14 de septiembre de 2023 por la contratista URBAMED INFREAESTRUCTURAS S.L, así como su pretensión de la resolución

del contrato por causas imputables a la administración artículo 211.1g); motivado en las razones expuestas en el informe de 10 de enero de 2024 de la secretaria- interventora.

TERCERO- Proponer la resolución del contrato ante la paralización de la obra, que entiendo faculta al Ayuntamiento a resolver el contrato por el incumplimiento de la obligación principal del contrato, construcción del edificio escolar, causa recogida en el artículo 211.1.f) de la LCSP, con la empresa URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L con CIF B98448855, para la obra 'construcción en la misma parcela y demolición del edificio existente del centre Tirant lo Blanc, CRA Baronia Baixa, incluido en el Pla Edificant' Expte: C0 1/2021 PAS".

• El 25 de abril de 2024, Urbamed solicitó el reconocimiento al derecho a la revisión extraordinaria de precios, su cuantificación, aprobación y pago, correspondiente al contrato de obras al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo y el acuerdo del Consell de 1 de abril de 2022, por el que se adopta la decisión individualizada del órgano competente de la Comunidad Valenciana que hace extensiva la aplicación del RD-L 3/2022 a las entidades Locales Valencianas.

• El derecho fue reconocido provisionalmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers de 30 de mayo de 2024, que incorporaba una transcripción del informe propuesta de Secretaría de 29 de mayo de 2024, sin fijar un importe determinado, dando traslado del acuerdo a la contratista y abriendo trámite de audiencia para la misma.

• El 6 de mayo, la Dirección Facultativa de las obras emitió una Propuesta de liquidación final de la obra ejecutada, con un saldo final negativo de -62.363,44 € para la contratista. También se incluyó una Propuesta de valoración de partidas ejecutadas no incluidas en el proyecto, con un saldo positivo de 26.134,01 € a favor de la contratista. La liquidación final del contrato, a 27 de junio de 2024 ascendió al total de - 11.991,79 €.

•El 27 de junio de 2024 se aportó certificación final de la obra en la que se incluyó la cuantía resultante de la revisión de precios.

• El 8 de julio de 2024, el Pleno del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers 2024, acordó, entre otras cuestiones, resolver el contrato ante la paralización de la obra, que faculta al ayuntamiento a resolver el contrato por el incumplimiento de la obligación principal del contrato, construcción del edificio escolar, causa recogida en el artículo 211.1 f) de la LCSP.

• Urbamed accedió a la notificación del acuerdo el 9 de julio de 2024.

- **En la actualidad con motivo de la contestación a la demanda formulada en el recurso contencioso administrativo: Procedimiento ordinario 362/2024, a instancia de URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L, contra el acuerdo adoptado por el pleno de este ayuntamiento en fecha 8 de julio de 2024, en el que alega, que dos son los motivos de impugnación: 1) De carácter formal, consistente en la caducidad del procedimiento en el momento en que se dictó el acuerdo de resolución contractual. 2) De carácter sustancial, inexistencia de las causas de resolución de dicho contrato por las causas esgrimidas por la administración demandada.**

  Esta secretaria interventora considera conveniente revisar la posible causa de caducidad del procedimiento, formulándose las siguientes consideraciones jurídicas:

DE LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO

1.Plazo de 8 meses para instruir, resolver y notificar la resolución.

El procedimiento de resolución contractual es un procedimiento con sustantividad propia, autónomo e independiente del propio contrato administrativo, conforme al artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Además, se encuentra reconocida jurisprudencialmente tal naturaleza jurídica, entre otras muchas, en las STS núm. 4151/2011, de 28 de junio (rec. 3003/2009), STS núm. 6326/2007, de 2 de octubre (rec. 7736/2004) y STS núm. 643/2008 de 13 de marzo (rec. 1366/2005) donde se reconoce la especificidad de este tipo de procedimientos, y, por tanto, de su sujeción a un régimen jurídico propio.

Por su parte, el artículo 212.8 de la LCSP dispone que "los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses", produciéndose en otro caso su caducidad. "Con lo cual se fija por ley el plazo máximo en que haya de notificarse la resolución expresa en estos procedimientos", como señaló la **Sentencia de la Audiencia Nacional , Sala de lo Contencioso-administrativo, de 4 de mayo de 2021, (rec. 1669/2019).**

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de marzo de 2021, por la que se declaró la inconstitucionalidad de determinados preceptos de la LCSP, entre ellos el art. 212.8, fijó como consecuencia de aquella declaración solamente la de que no sería aplicable a los contratos suscritos por las Administraciones de las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las entidades vinculadas a unas y otras.

En la Comunidad Valenciana, la disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, fijó como plazo máximo para instruir, resolver y notificar los expedientes de resolución contractual de contratos administrativos de la Generalitat, de las entidades locales de la Comunitat Valenciana, de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana y de las respectivas entidades vinculadas o dependientes en 8 meses.

2.La suspensión del procedimiento.

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se puede suspender, de acuerdo con el artículo 22.1.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ("LPACAP"):

"d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento."

Sin que la suspensión tenga carácter automático (Dictamen 92/2012, de 29 de febrero del Consejo Jurídico Consultivo de Castilla y León), se comprende en este supuesto la posibilidad de suspensión de un procedimiento de resolución contractual durante la emisión de un informe preceptivo de un consejo jurídico consultivo. El Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, como expresa el artículo 1 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana es el supremo órgano consultivo del

Consell de La Generalitat y de su Administración, y, si procede, de las administraciones locales radicadas en la Comunitat Valenciana.

De acuerdo con el citado precepto 22.1d), en este caso consta la comunicación a la contratista el 1 de marzo de 2024, de la suspensión del procedimiento desde la remisión del expediente al Consell el 12 de enero de 2024, firmado por la alcaldesa María Dolores Asensi Ferrús, en virtud de su competencia residual (artículo 21.1s) de la ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local) de todas aquellas funciones que no estén expresamente atribuidas al pleno del ayuntamiento ; y se comunicó la reanudación del procedimiento el 28 de marzo de 2024, en el acuerdo del Pleno de 15 de abril de 2024; en cuyo acuerdo queda ratificado la suspensión del procedimiento en el período comprendido del 12 de enero al 28 de marzo de 2024.

3. El cómputo del plazo.

No habiendo precepto específico que determine el momento de inicio del cómputo, el artículo 21.3 de la LPACAP dispone que el plazo máximo para resolver cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, se contará, en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. El dies a quo del plazo de 8 meses para instruir resolver y notificar, comenzó desde el acuerdo de inicio del procedimiento de resolución el 21 de agosto de 2023.

El artículo 30. 4 de la LPACAP determina que, si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.

Por lo que **antes de la suspensión** del procedimiento o para el caso de no considerarse eficaz la suspensión, el plazo de 8 meses hubiera vencido el 21 de abril de 2024.

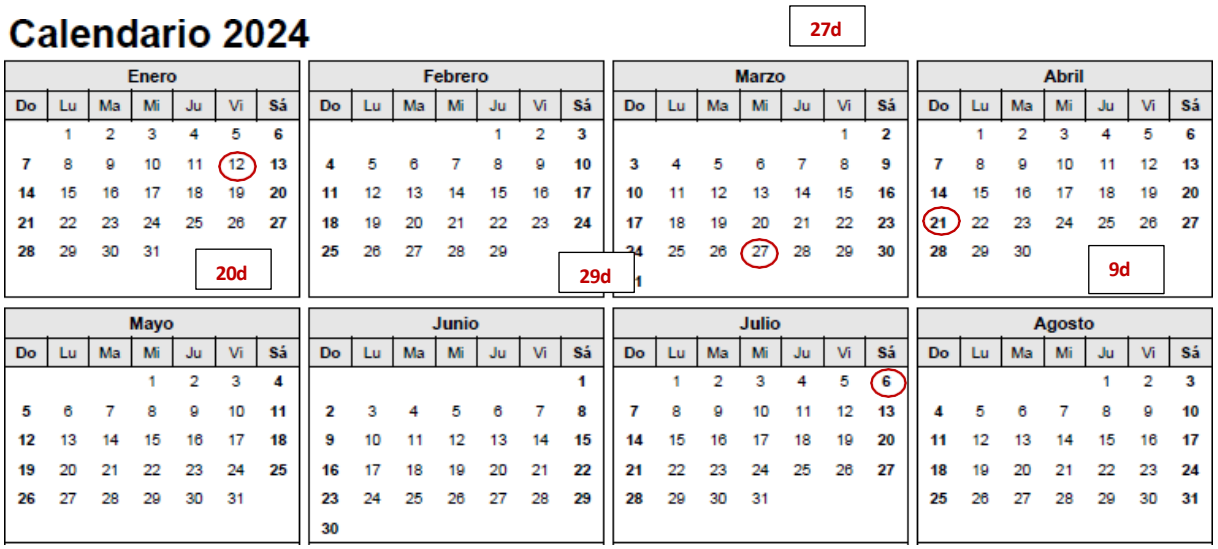
En cuanto a la forma de computar el período en que se suspende el cómputo del plazo, si se aplican las reglas generales del cómputo de plazos, y el plazo para la emisión del informe se fija en meses o años, éstos se computarán por meses o por años.

El artículo 14.1 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana dispone que los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu han de ser emitidos en un plazo máximo de un mes a contar desde la recepción del expediente.

Tras la suspensión del procedimiento desde el 12 de enero de 2024, se paralizó el plazo hasta la recepción del informe preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo el 28 de marzo de 2024. En meses, esto son al menos 2 meses y medio de suspensión o 3 meses al alza, según el cómputo por meses del plazo para emitir informe y suspensión del procedimiento. Si se computan 2 meses y medio, el plazo hubiera finalizado el 6 de julio de 2024. Si se computan 3 meses el plazo para la resolución y notificación del expediente hubiera finalizado el 21 de julio de 2024.

Si se interpreta que el plazo de suspensión debía computarse por días, como por ejemplo consideró la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 5 de junio de 2020, (rec. 247/2019), la suspensión del procedimiento de 12 de enero al 28 de marzo de 2024 (momento en que se reanudó el procedimiento) duró 76 días (20+29+27). Al sumar estos 76 días desde la finalización teórica y pre-suspensión del expediente el 21 de abril de 2024, el plazo de caducidad hubiera finalizado el 6 de julio de 2024 (9+31+30+6).

De acuerdo con la ley 39/2015, articulo 30.2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. Por lo que el día 8 de julio, se computa como el siguiente día hábil.



La notificación del Acuerdo de resolución del contrato se puso a disposición de Urbamed infraestructuras S.L el día 8 de julio de 2024, siguiente día hábil dentro del plazo.

En consecuencia, y teniendo en cuanta que según jurisprudencia, todas las normas en materia de contratación pública han dispuesto la aplicación de la ley de procedimiento administrativo de modo **subsidiario termino** que no es igual que **supletorio,** siendo básica de aplicación al procedimiento de resolución contractual, el previsto en el artículo 109 de reglamento de contratación y disposición adicional primera de la ley 7/2021 de medidas administrativas de la Generalitat. Entiendo que a grosso modo, se cumple lo preceptuado en la disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, que fija como plazo máximo para instruir, resolver y notificar los expedientes de resolución contractual de contratos administrativos de la Generalitat, de las entidades locales de la Comunitat Valenciana, de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana y de las respectivas entidades vinculadas o dependientes en 8 meses.

No obstante, el juzgado puede apreciar algunos defectos formales respecto a la suspensión de la caducidad y suspensión del procedimiento, en base a estos dictámenes:

(Dictamen 92/2012, de 29 de febrero del Consejo Jurídico Consultivo de Castilla y León), se comprende en este supuesto la posibilidad de suspensión de un procedimiento de resolución contractual durante la emisión de un informe preceptivo de un consejo jurídico consultivo. El Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, como expresa el artículo 1 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de

creación del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana es el supremo órgano consultivo del Consell de La Generalitat y de su Administración, y, si procede, de las administraciones locales radicadas en la Comunitat Valenciana.

Entiende el Consejo Jurídico Consultivo de Castilla y León (Dictamen 92/2012, de 29 de febrero), que es preciso que **dicha suspensión sea acordada de forma expresa y notificada a los interesados**.

En este caso, consta la comunicación a la contratista el 1 de marzo de 2024, de la suspensión del procedimiento desde la remisión del expediente al Consell el 12 de enero de 2024, firmado por la alcaldesa María Dolores Asensi Ferrús, y la reanudación del procedimiento el 28 de marzo de 2024, como reflejó el acuerdo del Pleno de 15 de abril de 2024. **No obstante, no consta acuerdo expreso de suspensión del procedimiento**.

De otra parte, si se acepta la suspensión del procedimiento desde el 12 de enero de 2024, el plazo se paralizó hasta la recepción del informe preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo el 28 de marzo de 2024. En meses, esto son al menos 2 meses y medio de suspensión o 3 meses al alza, según el cómputo por meses del plazo para emitir informe y suspensión del procedimiento. **Si se computan 2 meses y medio, el plazo hubiera finalizado el 6 de julio de 2024. Si se computan 3 meses el plazo para la resolución y notificación del expediente hubiera finalizado el 21 de julio de 2024.**

Si se interpreta que el plazo de suspensión debía computarse por días, como por ejemplo consideró la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 5 de junio de 2020, (rec. 247/2019), la suspensión del procedimiento de 12 de enero al 28 de marzo de 2024 (momento en que se reanudó el procedimiento) duró 76 días (20+29+27). Al sumar estos 76 días desde la finalización teórica y pre-suspensión del expediente el 21 de abril de 2024, el plazo de caducidad hubiera finalizado el **6 de julio de 2024** (9+31+30+6). Día 8 de julio, si se computa hasta el siguiente día hábil.

Estos posibles defectos de procedimiento podrían dar lugar a la declaración de caducidad del expediente de resolución contractual, obligando a la administración a iniciar un nuevo procedimiento, cuando en un plazo incierto se dicte la resolución del recurso contencioso administrativo; por lo que, para evitar el considerable retraso que supondría esperar el fallo y que este estimase la pretensión de caducidad se somete a la consideración de la corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

1. De

clarar la caducidad del procedimiento de resolución del contrato de las obras “construcción en la misma parcela y demolición del edificio existente del centre Tirant lo Blanc, CRA Baronia Baixa, incluido en el Pla Edificant”, por exceder del plazo de 8 meses, la tramitación del procedimiento de resolución.

2.

Re

vocar el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers de 8 de julio de 2024, al haber acontecido en un procedimiento caducado.

3.

Inc

oar nuevo procedimiento de resolución del contrato de las obras “construcción en la misma parcela y demolición del edificio existente del centre Tirant lo Blanc, CRA Baronia Baixa, incluido en el Pla Edificant” atendiendo a la paralización total unilateral de la obra por URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L desde el 15 de junio de 2023, de acuerdo el artículo 211.1.f) de la LCSP, y por haber transcurrido el término de ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 211.1.d) de la LCSP, en base a los siguientes :

I. ANTECEDENTES

- El 25 de junio de 2021, se publicó en la plataforma estatal de contratación el anuncio de licitación y los pliegos que debían regir la licitación para las obras ‘construcción en la misma parcela y demolición del edificio existente del centre Tirant lo Blanc, CRA Baronia Baixa, incluido en el Pla Edificant.
El valor estimado del contrato era de 1.425.817,28€, con un presupuesto base de licitación porimporte de 1.725.238,91€.

  El plazo de ejecución del contrato era de 9 meses contados a partir del día siguiente de la formalización del contrato.

- El 4 de agosto de 2021, se adjudicó el contrato a **URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L.**por importe de 1.412.218,57€ , 1.708.784,47 € con IVA. Formalizándose el contrato el 24 de agosto de 2021.
- El 23 de septiembre de 2021, se firmó el Acta de Replanteo para acometer únicamente los trabajos de demolición, anunciada ya la problemática del trazado aéreo del tendido que invadela parcela.
- El 21 de octubre de 2021, **Antonio Tatay Noguera**, en representación de **URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L.** solicitó la suspensión temporal total de las obras, tras realizar la demolición de la edificación existente, y una ampliación del plazo hasta el reinicio de estas.
- El 25 de octubre de 2021, se paralizaron temporalmente las obras para la retirada y desvío de una línea eléctrica y una línea telefónica en la parcela, que impedían la ejecución del resto de trabajos.
- El 3 de diciembre de 2021, por Decreto de Alcaldía 611/2021, se resolvió autorizar la suspensión temporal del contrato con efectos desde el 25 de octubre de 2021 hasta que finalizasen las obras de reposición de las líneas eléctricas y telefónicas, debiendo comunicar la contratista al Ayuntamiento la finalización de las obras y la fecha de reanudación de los trabajosen la obra principal.
Al mismo tiempo, se condicionaba la suspensión del contrato a que la empresa adjudicataria dela obra renunciase a cualquier tipo de indemnización contenida en el artículo 208 LCSP y demáslegislación vigente, por haberse previsto antes del inicio de la

obra, que en el caso de concluirse el derribo antes del desvío de las líneas, se suspendería el contrato.

- El 14 de diciembre de 2021, **Antonio Tatay Noguera**, en representación de **URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L.** presentó recurso de reposición al anterior decreto, solicitando la corrección de la fecha de inicio de la suspensión.
- El 20 de diciembre de 2021, por Decreto de Alcaldía 637/2021, se estimaron las alegaciones de la contratista, rectificando la fecha de inicio de la suspensión al 1 de octubre de 2021.
- El 22 de febrero de 2022, la Dirección Facultativa comunicó al Órgano de Contratación que las distintas servidumbres se encontraban ya desviadas.
- El 24 de febrero de 2022, mediante Decreto de Alcaldía 78/2022, se emplazó a la contratista para que comunicase al Ayuntamiento la fecha de reanudación de los trabajos en la obra.
- **URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L** propuso como fecha de reinicio el 18 de abril de 2022.
- El 19 de abril de 2022, se reanudaron los trabajos de obra, firmándose Acta de Reinicio de Obra.
- El 24 de abril de 2023, se solicitó por Francisco Herrera Antonino, en nombre de **URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L**, la ampliación del plazo de ejecución para la terminación de las obras el 21 de agosto de 2023.
- El 31 de mayo de 2023, **Lourdes García Sogo,** en representación de la UTE Tirant Lo Blanc Sogo Arquitectos, informó el estado de ejecución de las obras y su retraso en la ejecución.
- El 13 de junio de 2023, **Rubén Bernabé Miñana**, en representación de **URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L** presentó escrito en el que comunicó la paralización temporal total de las obras a partir del 15 de junio de 2023 y solicitaba la suspensión de la ejecución del contrato.
- El 20 de junio de 2023, **Lourdes García Sogo,** en representación de la UTE Tirant Lo Blanc Sogo Arquitectos, informó de que por parte de la Dirección Facultativa no se apreciaba motivo alguno para la suspensión de la ejecución de la obra.
- El 21 de junio de 2023, **Marina Torres de Fuentes**, arquitecta empleada en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, informó que no existían motivos técnicos suficientes para la suspensión temporal y total de las obras.
- El 21 de junio de 2023, **Rubén Bernabé Miñana**, en representación de **URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L**, presentó escrito denominado 'Acta suspensión temporal de obras', en el que se comunica la 'suspensión' de la totalidad de las partidas o unidades de obras a partir de las 8:00 horas del 15 de junio de 2023, manteniendo únicamente abierta la oficina de obra, así como el servicio mínimo de mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de la obra.
- El 30 de junio de 2023, se procede a notificar a **URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L** el acuerdo adoptado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento en la sesión extraordinario del 27 de junio de 2023, de no aceptar la suspensión temporal de la obra y no acordar la suspensión del contrato, ante la falta de justificación documental de la imposibilidad de continuar la obra.

• El 12 de julio de 2023, **Marina Torres de Fuentes**, arquitecta empleada en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, informó del estado de las obras a día 11 de julio de 2023, su paralización efectiva el 14 de junio de 2023, aunque con una reducción paulatina del ritmo de construcción con anterioridad; el incumplimiento de plazos intermedios sobre algunos elementos constructivos según el plan de trabajos que la empresa constructora presentó el 2 defebrero del 2023; y el incumplimiento del plazo de finalización de las obras el 12 de diciembrede 2022, valorando que las obras debieron estar completamente finalizadas hacía 7 meses y quese encontraban en una fase de construcción inaceptablemente temprana.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. Competencia.

La suspensión de los contratos públicos es una de las prerrogativas de las Administraciones públicas como órganos de contratación, que de acuerdo con el artículo 190.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico españollas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, "LCSP") ostentan junto con la de interpretar los contratos administrativos, resolverlas dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Específicamente para el contrato de obras, el artículo 170 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ("RGLCAP") atribuye al órgano de contratación, mediante acuerdo, la suspensión definitiva de las obras por motivo grave.

Por tanto, como regla general, la facultad de suspender un contrato corresponde al órgano de contratación. Excepcionalmente se faculta al contratista a la suspensión del contrato en un supuesto concreto, como veremos.

2. Causas de suspensión.

Al contrario que la regulación de la resolución contractual, ningún artículo recopila las causas de suspensión de los contratos públicos, sino que las encontramos dispersas en la LCSP y el RGCAP. Por lo que, no puede hablarse de un *numerus clausus* o relación cerrada de causas, sino que se deja en su mayoría a la discreción del órgano de contratación, que, como contrapartida, implica el abono por la Administración de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por el contratista con sujeción a las reglas y los conceptos del artículo 208 de la LCSP.

En primer lugar, como causa específica de suspensión, encontramos la demora en el pago del precio convenido en un plazo de cuatro meses (art.198.5 LCSP). Se trata de la única causa de suspensión del cumplimiento del contrato, en que se autoriza a la suspensión por parte del contratista, debiendo solo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión.

En segundo lugar, cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, total o parcial de la ejecución de las obras. Motivo de suspensión, que se deduce de una parte, de la posibilidad que reconoce la Ley de continuar provisionalmente las obras cuya paralización ocasione graves perjuicios para el interés público (art. 242.5 LCSP), y de otra, de la regulación de las modificaciones acordadas como consecuencia de la comprobación del replanteo (art. 141 RGCAP). En cualquier caso,se trata de una causa que no produce la suspensión automática, sino que se deja a discreción del órganode contratación su apreciación.

3. La paralización de la ejecución de la obra por parte de URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L.

El 13 de junio de 2023, se comunicó al órgano de contratación la suspensión temporal total de las obraspor parte de la contratista "*por razones de seguridad y prudencia jurídica, técnica y económica, en tanto no se resuelva el problema creado por la falta de aprobación de un proyecto técnico modificado que refleje todas las variaciones respecto del proyecto licitado las ya ejecutadas y las pendientes de ejecutar) así como su adecuada valoración, circunstancia que no se cumple en la actualidad al disponerse únicamente del proyecto técnico aprobado el 28/1/2021 objeto de licitación*".

Señalándose, además, que se había producido un colapso en la ejecución de los trabajos en obra y en su programación, al depender éstos de la aprobación de un modificado del Proyecto técnico objeto de licitación.

Por su parte, la Dirección Facultativa, en su informe de 20 de junio de 2023, indicó que las variacionesen el proyecto se produjeron como consecuencia de las exigencias de la contratista para comenzar la obra, y que habiendo participado en otras obras del Plan Edificant con los mismos condicionantes económicos, mismo módulo de este contrato, y con los mismos materiales y sistemas constructivos, estando sujeto además a las revisión excepcional de precios el contrato de obras, no se observaba ningúnmotivo para la suspensión temporal de la obra.

De la misma manera se señaló por la arquitecta del Ayuntamiento en su informe técnico de 21 de junio de 2023, no apreciando la existencia de motivos suficientes para la suspensión temporal total de las obras.

El 27 de junio de 2023, el Pleno del Ayuntamiento de Albalat Dels Tarongers, acordó la no suspensióndel contrato.

Pues bien, considerando que el Ayuntamiento de Albalat del Tarongers se encuentra al corriente en el pago del precio, y que la causa alegada de suspensión es la falta de aprobación de la modificación del contrato, **no puede interpretarse la paralización de la ejecución de las obras como una suspensióndel contrato.**

Para empezar, porque la prerrogativa de suspender un contrato corresponde al órgano de contratación (art. 190 LCSP), salvo en el supuesto del artículo 198.5 LCSP, que como hemos visto, no concurre, ni se ha alegado por la contratista. Por lo que la sociedad acordó unilateralmente la suspensión de la ejecución sin contar con el acuerdo del Pleno, único con facultad para ello.

De otra parte, como señala claramente el artículo 97 del RGCAP, la tramitación de incidencias surgidasen la ejecución de los contratos (entre ellas la modificación de las condiciones contractuales) no determinará la paralización del contrato, salvo motivos de interés público lo justifiquen o la naturalezade las incidencias lo requiera.

De manera que, **la regla general es la no paralización de la ejecución del contrato**, incluso para las modificaciones necesarias a raíz de la comprobación del replanteo, en que se ordena la iniciación de los trabajos en aquellas partes no afectadas por las modificaciones previstas en el proyecto (art. 141.2 RGCAP). **Solamente motivos de interés público, o la naturaleza de la incidencia podrían justificarla paralización excepcional de la obra, que, con todo, no se dan.**

Al contrario, el interés público aconsejaría la continuación de una obra que lleva un retraso considerableen el plazo de ejecución, y cuya terminación es necesaria para el traslado de los menores de su emplazamiento habitual al recinto del colegio objeto del contrato en cuestión. Tampoco la contratista ha justificado los extremos, más allá de su genérica alegación, en qué la tramitación de la modificación del contrato impide la continuación total de la ejecución de las obras, teniendo en cuanto que en sus términos (pág. 2, escrito de 13 de junio de 2023), la modificación del contrato afecta al 15,37% del precio de adjudicación respecto de las unidades nuevas pendientes de ejecutar. Lo que en ningún caso excluiría la continuación de trabajos en aquellas partes no afectadas por la solicitud de modificación.

En consecuencia, y pese a la presentación por parte de URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L.el 21 de junio de 2023, de un acta de suspensión temporal total de las obras no suscrita por el órgano de contratación o la Dirección Facultativa, el contrato, sus efectos y su plazo de ejecución, **no se encuentran suspendidos total o parcialmente, sino que se ha producido una paralización** unilateral de su ejecución por parte de la contratista.

SEGUNDO. - LA PARALIZACIÓN TOTAL DE LA OBRA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

1. Introducción.

El escrito de 13 de junio de 2023 de la contratista anunció la paralización temporal total de la obra hastala preceptiva modificación del proyecto desde el 15 de junio de 2023. Pese a que la ejecución de la obrase había ralentizado paulatinamente hacía meses hasta su casi completa paralización y que no se cumplieron con los plazos intermedios sobre algunos elementos constructivos según el plan de trabajos que la empresa constructora presentó el 2 de febrero del 2023, como informó el 12 de julio de 2023,

Marina Torres de Fuentes, arquitecta empleada en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers.

2. Consecuencias.

De las repercusiones que tiene la paralización de la obra, destaca la posible imposición de penalidadespor la demora en el cumplimiento del plazo del contrato y la facultad de resolución de este. Veámoslas.

La cláusula 31 del PCAP establece que el adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto alcumplimiento del plazo total, la Entidad Local podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la EntidadLocal, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarseal contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Por su parte, el apartado b) del Cuadro Resumen determinaba que "*el plazo previsto para la ejecucióndel contrato será de **9 meses** contados a partir del día siguiente de la formalización del contrato*", no fijando clausulas adicionales sobre penalidades, pero sí en materia de resolución, en las que se especificó:

"No dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello a los que se ha comprometido en contratista ensu oferta. En particular las señaladas en el apartado u)."

La cláusula 50 del PCAP establecía como causas de resolución del contrato, además de las generales de la Ley las siguientes: a) la demora injustificada en la comprobación del replanteo; b) la suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses; c) la suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la

Administración; d) el desistimiento. Transcribiendo con ello el contenido del artículo 245 de la LCSP sobre las causas específicas de resolución de los contratos de obras.

Sin olvidar que la LCSP establece en el artículo 211.1 como causas de resolución de todas las tipologíascontractuales:

"1. Son causas de resolución del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinciónde la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previstoen el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otroprocedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido *calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documentodescriptivo, cuando concurran los dos requisitos siguientes:*

1. º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establecepara la libertad de pactos.

2. º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegoso en el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato."

Por ende, sería procedente tanto la aplicación de penalidades con los límites ya señalados (cláusula 31del PCAP y art. 193.3 de la LCSP), como la resolución del contrato.

3. **Causas de resolución del contrato apreciables.**

A) La paralización total de la obra.

El artículo 211.1.f) de la LCSP recoge como causa genérica de resolución de cualquier tipología contractual, la resolución del contrato por "***el incumplimiento de la obligación principal del contrato****".*

Esta ha de entenderse como causa distinta de resolución que el incumplimiento del resto de obligaciones esenciales del contrato trae, pues el artículo continúa diciendo que:

"Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos siguientes:

1. ***°*** *Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece para la libertad de pactos.*

2. ***°*** *Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general."*

Indudablemente, en un contrato de obras, **la obligación principal del contratista es la ejecución de la obra, prestación esencial por sí misma del contrato a cuyo favor la Administración remunera a la contratista como contraprestación esencial**. Por lo que, respecto de esta prestación, no será necesaria su inclusión en los pliegos como obligación esencial, pues de facto, lo es.

En este sentido, la Sentencia de 1 de octubre de 1999, del Tribunal Supremo (rec. 2979/1994), determinó que el incumplimiento que puede motivar la resolución del contrato debe afectar a la prestación principal y exteriorizarse a través de una inobservancia total o esencial de dicha prestación de modo que se haya producido un hecho obstaculizador al fin normal del contrato,frustrante de las legítimas expectativas de alcanzar el fin perseguido por el contrato.

A este respecto, se han pronunciado diversos Consejos Consultivos, cuyos dictámenes son preceptivos en caso de oposición por parte del contratista en los supuestos de resolución contractual (art. 191 LCSP).

En algunos supuestos se ha considerado que una obligación es esencial, pese a que no figure como tal en los pliegos y en el contrato, atendiendo al carácter básico de dicha obligación. Porello, acreditado su incumplimiento, se dictaminó la procedencia de la resolución contractual por tal causa. De esta manera, se ha considerado que el abandono de la obra por parte de la empresa contratista constituye el incumplimiento de una de las obligaciones contractuales esenciales, pues resulta evidente que la obligación esencial del contratista es la ejecución de laobra (Dictámenes 1.222/2009, de 26 de noviembre, y 32/2010, de 18 de febrero).

A la misma conclusión se llegó en un procedimiento de resolución de un contrato de servicios,en el que estaba acreditado el incumplimiento del contratista de su obligación de prestar el servicio de bar restaurante, que llevaba cerrado varios meses. Tal obligación, en cuanto era el objeto del contrato, era esencial y su incumplimiento determinaba la concurrencia de la causa de resolución (Dictamen 528/2013, de 18 de julio).

Por otra parte, como indicaba el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La-Mancha nº 24/2015, de 28 de diciembre, "*ha de tenerse en cuenta que la causa de resolución tipificada enel artículo 223.f) tiene su precedente en el artículo 111.g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,de 16 de junio, que también tipificaba como causa de resolución `el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales´, pero sin exigir, como hace la norma actual, que en el pliego o en el contrato se hayan calificado como tales. Es de reseñar que aunque seaconveniente que en los propios pliegos o contratos se contenga una calificación de sus cláusulas, puesto que son los instrumentos en los que las partes determinan aquello a lo que seobligan, esta nueva exigencia, introducida por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratosdel Sector Público,* ***no debe interpretarse en el sentido de que de no hacerse así resulte*** imposible resolver un contrato por el incumplimiento de sus cláusulas esenciales, puesto que ***lo realmente determinante es su carácter o no como tales***. *De lo contrario, en casos como el presente en los que no se determina expresamente qué obligaciones son esenciales, habría queextraer la consecuencia de que no cabría en ningún caso la resolución por este motivo, lo cualsería absurdo*". En este el mismo sentido se ha venido pronunciado el Consejo Consultivo (portodos, en los Dictámenes 425/2015, de 4 de noviembre; 172/2016, de 12 de mayo y 55/2018, de 7 de marzo).

Pues bien, la mercantil URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L. manifestó primero de palabra, y más tarde en su escrito de 13 de junio de 2023, que procedía a la suspensión total deobra hasta que no se procediera a la modificación del contrato de obras en cuestión. **Paralización unilateral que, como hemos tenido ocasión de ver, no implica suspensión delcontrato, por cuanto el órgano de contratación desestimó su solicitud de suspensión en lasesión del Pleno del Ayuntamiento de 27 de junio de 2023 e intimó a la contratista la ejecución del contrato y la continuación de la obra, no apreciando la necesidad de suspender la ejecución del contrato a la vista de la solicitud presentada.**

En consecuencia, el detenimiento de la ejecución de la obra y su negativa a cumplir la **obligación principal contrato, determina la concurrencia de la causa de resolución del** artículo 211.1.f) de la LCSP.

B) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

El plazo previsto para la ejecución del contrato era de 9 meses improrrogables, contados a partir del día siguiente de la formalización del contrato (apartado b) del Cuadro Resumen). En este caso, la formalización se produjo el 24 de agosto de 2021 y la fecha de fin de obra prevista trasla suspensión del contrato era el 12 de diciembre de 2022, por la interrupción del plazo de ejecución del contrato de conformidad con el art. 148.2 RGLCAP.

Como informó el 12 de julio de 2023, Marina Torres de Fuentes, arquitecta empleada en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, la ejecución de la obra adolecía de un retraso notable en su ejecución, cuya finalización estaba prevista el 12 de diciembre de 2022 y solo se estimaba ejecutado el 35% de la obra prevista, computando 9 meses de ejecución tras la reanudación de la ejecución del contrato con el reinicio de obras tras la suspensión inicial del contrato el 19 de abril de 2022.

El Informe de 31 de mayo de 2022, de Lourdes García Sogo, en representación de la UTE TirantLo Blanc Sogo Arquitectos, sobre el estado de ejecución de las obras constató el manifiesto retraso en la ejecución del contrato, en el siguiente cuadro:

		9 meses 270 días			
		PLAZO EJECUCION CONTRATO	SUSPENSIONES TEMPORALES JUSTIFICADAS DEL PLAZO	SUSPENSIONES TEMPORALES NO JUSTIFICADAS DEL PLAZO	EXCESO SOBRE PLAZO EJECUCION CONTRATO
FECHA	23/09/2021				
HITO	Acta comprobación replanteo e inicio de la obra				
DURACION EJECUCION CONTRATO		32			
	25/10/2021				
	Suspensión temporal total de las obras				
DURACION TRABAJOS DE DESVIO DE SERVIDUMBRES			123		
	24/02/2022				
	Decreto Alcaldía solicitando la reanudación de la obra				
RETRASO EN LA REANUDACION DE OBRA POR IMPOSICIÓN DE URBAMED				54	
	18/04/2022				
	Propuesta de URBAMED para la reanudación de la obras				
	19/04/2022				
	Acta de reinicio de obra				
DURACION EJECUCION CONTRATO		238			
	12/12/2022				
	Fecha finalización plazo según contrato				
	12/12/2022				
	Fecha finalización plazo según contrato				
DURACION EJECUCION CONTRATO FUERA DE PLAZO					170
	31/05/2023				
	Fecha informe estado de la obra				
DURACION EJECUCION CONTRATO FUERA DE PLAZO					86
	25/08/2023				
	Fecha finalización de la obra, según último plan de obras, entregado el 2/2/2023				
					17
TOTALES		270	123	54	256

"El ritmo de la obra ha sido lento desde el principio, debido a la parquedad de medios puestos por la empresa constructora para la ejecución de los trabajos de cimentación y estructura. Unos pocos operarios han realizado la totalidad de estos dos capítulos." (pág. 4)

"Pero los plazos están sobrepasados ampliamente. Uno de los principales motivos, insistimos,es la falta de disposición de medios materiales y humanos necesarios para ejecutar esta cimentación y estructura dentro de unos plazos razonables.

A fecha del presente informe, el exceso de plazo tras la reanudación de los trabajos es ya de más de 5 meses. Y tan solo se ha certificado el 31,2% del total de la obra. La empresa constructora ha invertido 10 meses en la ejecución de cimentación y estructura (mayo 2022 – febrero 2023), cuando la previsión inicial que planteaban en el primer plan de obra entregadoera de 4 meses y 3 semanas. No hay ninguna razón técnica ni de especial dificultad que justifique este enorme desfase. Simplemente falta de recursos asignados a la obra. Entendemosque es necesario, para finalizar los trabajos en el menor plazo posible, revisar la adscripción de medios que esta constructora ha asignado y contrastarla con las condiciones del contrato suscrito." (pág. 5 y 6)

"El plazo de ejecución de la obra está ampliamente sobrepasado…Con todo ello, tenemos un hipotético exceso sobre el plazo de ejecución del contrato de 256 días.

A este retraso hay que añadir los 54 días que tardaron en reiniciar la obra una vez finalizaronlos trabajos de desvío de las instalaciones que afectaban a la parcela." (pág. 16)

Por lo que, se aprecia claramente una demora en el cumplimiento de los plazos por parte de la contratista, por un tiempo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato; siendo que hoy en día la obra lleva un retraso de más de 7 meses, lo que supone un 77,7% del plazo de ejecución del contrato (9 meses), que supera el tercio marcado por la LCSP (art. 211.1d *in fine*).

Retraso injustificado atribuible a la adjudicataria, por cuanto no se ha computado en estos cálculos el periodo de suspensión del contrato derivado de la retirada de las líneas eléctricas y se ha imputado a la insuficiente adscripción de medios de la sociedad. Más si cabe, atendiendoa la paralización unilateral y no autorizada de las obras por la contratista.

En este sentido, sobre la importancia que tiene el plazo de ejecución en los contratos administrativos, señalamos que el Tribunal Supremo los ha calificado como "*negocios jurídicosa plazo fijo*", debido al interés público que revisten. Como recordó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de abril de 2016 (rec. 303/2015): "*La realización de la obra en el plazo concedido es la principal obligación del contratista*".

Por ello, concurre plenamente la causa de resolución del apartado 1.d) del artículo 211 de la LCSP.

C) No dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello a los que se ha comprometido en contratista en su oferta.

El apartado w) del Cuadro Resumen incorpora como causa concreta de resolución la no dedicación o adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales o materiales suficientes para lo que se ha comprometido el contratista en su oferta. En particular, las señaladas en el apartado u) del Cuadro Resumen.

En concreto, el apartado u) establecía como obligación esencial del contrato adscribir a la realización de la obra los siguientes medios personales: Un jefe de obra. Un encargado de obra.Un responsable de instalaciones. Un responsable de seguridad y salud. Lo que se realizó a travésdel Anexo XIV del PCAP, donde además del puesto de trabajo, los nombres y apellidos, debíandetallarse los títulos académicos y profesionales.

En el contrato aparece el siguiente equipo asignado a la obra:

- Jefe de obra. Francisco Vicente Herrera Antonino. Arquitecto Técnico. Dedicación 100%
- Encargado de Obra. Jorge Olmo Domínguez
- Responsable de Instalaciones. Jesús Carratalá Orti. Ingeniero Técnico Industrial
- Responsable de Seguridad y Salud. Francisco José Blay Andrés. Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería, Máster en Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción.

Adscripción de medios que se modificó al equipo siguiente:

- Jefe de obra. Francisco Vicente Herrera Antonino. Arquitecto Técnico. Dedicación 100%
- Encargado de Obra. Irimel Baciu
- Responsable de Instalaciones. Virginia Salcedo.
- Responsable de Seguridad y Salud. Francisco José Blay Andrés. Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería, Máster en Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción.

Un cambio injustificado, o por profesionales con la experiencia o la formación académica de distinto grado a la ofertada inicialmente, **implicaría el incumplimiento de esta obligación esencial del contrato**.

De la misma forma, si las personas relacionadas verdaderamente no estuvieran vinculadas a la ejecución del contrato en los términos señalados por la contratista o el tiempo suficiente, como se ha puesto de manifiesto en algunos informes de la Dirección Facultativa, particularmente en el Informe de 31 de mayo de 2023.

4. Procedimiento.

El artículo 195 de la LCSP estipula que si la Administración optase por la resolución del contrato en el supuesto del artículo 193.3 LCSP esta deberá acordarse por el órgano de contratación, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposición por parte de este, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva.

Previsión que ya recogía genéricamente el artículo 191.1 LCSP, que requiere en los expedientes de resolución, modificación, suspensión o declaración de responsabilidad audiencia del contratista. Además, debe tenerse en cuenta el artículo 109 del RGLCAP, que exige la audiencia al avalista o asegurador "*si se propone la incautación de la garantía*".

Como estamos en el ámbito de la Administración Local, el artículo 114.3 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, establece como necesarios en el seno del procedimiento, los informes de la Secretaría y de la Intervención de la Corporación.

En cuanto al órgano al que compete la resolución, el artículo 212.1 de la LCSP dispone que "*se acordarápor el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista*", que en el caso que nos ocupa es el Pleno del Ayuntamiento.

En relación con el plazo para resolver, el artículo 212.8 de la LCSP establece que los procedimientos de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses. De la misma manera, en la Comunidad Valenciana, la disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, fija como plazo máximo para instruir, resolver y notificar los expedientes de resolución contractual de contratos administrativos de la Generalitat, de las entidades locales de la Comunitat Valenciana, de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana y de las respectivas entidades vinculadas o dependientes en 8 meses.

5. Efectos de la resolución.

Entre los principales efectos derivados de la resolución, descontando la evidente extinción de la relación jurídica y la liquidación de esta, encontramos la posibilidad de exigir una indemnización de daños y perjuicios, y de iniciarse el procedimiento de licitación del nuevo contrato para la ejecución restante delas obras.

Por tanto, existe previsión expresa de la indemnización de daños y perjuicios por el contratista en los supuestos de incumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso o demora en la ejecución en que no estéprevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración (194.1 LCSP y 99.2 RGLCAP).

Previsión que genéricamente recoge igualmente el artículo 213.3 LCSP, respecto de las resoluciones por incumplimiento culpable del contratista, en que le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de lagarantía incautada.

Por lo que, aunque parece desprenderse de la redacción literal del artículo 194 LCSP que solo cabría laindemnización de daños y perjuicios por la demora en la ejecución cuando no esté prevista penalidad por este motivo, o la misma no cubriera los daños causados a la Administración, **el artículo 213.3 LCSP ampara la exigencia de daños y perjuicios en todos los casos de incumplimientos culpables que originan la resolución del contrato, en cuantías que exceden del importe de la garantía**.

La determinación de los daños y perjuicios que debe indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia de este, atendiendo, entre otros factores,al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración (art. 113 RGLCAP).

Por otro lado, el artículo 213.6 LCSP prevé que al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del artículo 211.1, - concurren en este supuesto los motivos de la letra d) y f)- **podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución**.

Señalando, a su vez, que hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias porrazones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la

celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

Por último, de acuerdo con el artículo 246 LCSP, la resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días.

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. – Tras el acuerdo de 27 de junio de 2023, del Pleno del Ayuntamiento de Albalat del Tarongers, desestimando la solicitud de suspensión temporal total del contrato, **el contrato, sus efectos y su plazo de ejecución, no se encuentra suspendidos total o parcialmente, sino que se ha producido una paralización unilateral de su ejecución por parte de la contratista**.

SEGUNDA. – La paralización total de la obra, faculta al Ayuntamiento a resolver el contrato por el incumplimiento de la obligación principal del contrato, causa recogida en el artículo 211.1.f) de la LCSP.

TERCERA. – Se constató en el Informe técnico municipal de 12 de julio de 2023, el incumplimiento de plazos intermedios sobre algunos elementos constructivos según el plan de trabajos que la empresa constructora presentó el 2 de febrero del 2023; el incumplimiento del plazo de finalización de las obras el 12 de diciembre de 2022, debiendo las obras estar completamente finalizadas hacía 7 meses; y que se encontraban en una fase de construcción inaceptablemente temprana (estimación del 35% del total), en el Informe técnico municipal de 12 de julio de 2023.

CUARTA.- Además, la paralización temporal total de la obra desde el 15 de junio de 2023 por voluntad de Urbamed, generó por sí sola la concurrencia de la otra causa de resolución del inciso d) del artículo 211.1 de la LCSP: la demora

en el cumplimiento de los plazos por parte de la contratista por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato.

QUINTA.- Los procedimientos de resolución contractual deberán ser instruidos, resueltos y notificados en el plazo máximo de ocho meses (artículo 212.8 de la LCSP y DA 1 Ley 7/2021).

SEXTA.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los **daños y perjuicios** ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada (art. 213.3 LCSP).

SÉPTIMA.- Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos (art. 213.6 LCSP).

4. Incorporar al procedimiento de resolución contractual los actos y trámites del procedimiento de resolución previo cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad, en aplicación del 95.1 LPACAP.

5. Dar traslado del acuerdo a la empresa contratista URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L , concediéndole un periodo de audiencia por un plazo de diez días respecto de la incoación del procedimiento de resolución, en el que alegará lo que estime oportuno en defensa de sus intereses.

Vista la propuesta se acuerda por unanimidad, con el voto favorable de las 2 concejalas del PSOE, 2 concejales del PP Y 1 de VOX , concejalas 1 de AEVA Y 1 No Adscrita, y Sra Alcaldesa , su aprobación en todos los términos expuesto y que en resumen, resulta:

1. Declarar la caducidad del procedimiento de resolución del contrato de las obras “construcción en la misma parcela y demolición del edificio existente del centre Tirant lo Blanc, CRA Baronia Baixa, incluido en el Pla Edificant”, por exceder del plazo de 8 meses, la tramitación del procedimiento de resolución.

2. Revocar el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers de 8 de julio de 2024, al haber acontecido en un procedimiento caducado.

3. Incoar nuevo procedimiento de resolución del contrato de las obras “construcción en la misma parcela y demolición del edificio existente del centre Tirant lo Blanc, CRA Baronia Baixa, incluido en el Pla Edificant” atendiendo a la paralización total unilateral de la obra por URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L desde el 15 de junio de 2023, de acuerdo el artículo 211.1.f) de la LCSP, y por haber transcurrido el término de ejecución

del contrato, de acuerdo con el artículo 211.1.d) de la LCSP, en base a los siguientes consideraciones, explicadas anteriormente:

PRIMERA. – Tras el acuerdo de 27 de junio de 2023, del Pleno del Ayuntamiento de Albalat del Tarongers, desestimando la solicitud de suspensión temporal total del contrato, **el contrato, sus efectos y su plazo de ejecución, no se encuentra suspendidos total o parcialmente, sino que se ha producido una paralización unilateral de su ejecución por parte de la contratista**.

SEGUNDA. – La paralización total de la obra, faculta al Ayuntamiento a resolver el contrato por el incumplimiento de la obligación principal del contrato, causa recogida en el artículo 211.1.f) dela LCSP.

TERCERA. – Se constató en el Informe técnico municipal de 12 de julio de 2023, el incumplimiento de plazos intermedios sobre algunos elementos constructivos según el plan de trabajos que la empresa constructora presentó el 2 de febrero del 2023; el incumplimiento del plazo de finalización de las obras el 12 de diciembre de 2022, debiendo las obras estar completamente finalizadas hacía 7 meses; y que se encontraban en una fase de construcción inaceptablemente temprana (estimación del 35% del total),en el Informe técnico municipal de 12 de julio de 2023.

CUARTA.- Además, la paralización temporal total de la obra desde el 15 de junio de 2023 por voluntad de Urbamed, generó por sí sola la concurrencia de la otra causa de resolución del inciso d) del artículo 211.1 de la LCSP: la demora en el cumplimiento de los plazos por parte de la contratista por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato.

QUINTA.- Los procedimientos de resolución contractual deberán ser instruidos, resueltos y notificados en el plazo máximo de ocho meses (artículo 212.8 de la LCSP y DA 1 Ley 7/2021).

SEXTA.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los **daños y perjuicios** ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada (art. 213.3 LCSP).

SÉPTIMA.- Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos (art. 213.6 LCSP).

4. Incorporar al procedimiento de resolución contractual los actos y trámites del procedimiento de resolución previo cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad, en aplicación del 95.1 LPACAP.

5. Dar traslado del acuerdo a la empresa contratista URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L , concediéndole un periodo de audiencia por un plazo de diez días respecto a la incoación del procedimiento de resolución, contados a partir del siguiente a la notificación de este acuerdo, en el que alegará lo que estime oportuno en defensa de sus intereses.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS Y DEL EXPEDIENTE PARA LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE AEROTERMIA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DUS 500.

Se informa al pleno de la propuesta para las **OBRAS DE INSTALACIÓN DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA EN LOS EDIFICIOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, AGENCIA DE LECTURA Y LUDOTECA, incluida en el PROGRAMA DUS 5000. EXPEDIENTE 4/2025 PAS OBRAS** que dice así;

A la vista de cuanto antecede en el expediente 4/2025 PAS OBRAS, para realizar las obras DE INSTALACIÓN DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA EN LOS EDIFICIOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, AGENCIA DE LECTURA Y LUDOTECA, incluida en el PROGRAMA DUS 5000, que se tramita por este ayuntamiento.

Resultando que es necesaria la contratación de las obras para poder cumplir con los plazos de la subvención, por lo que se formula la siguiente:

PRIMERO. Aprobar los proyectos técnicos redactados por el ingeniero técnico industrial D. MIGUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ con el siguiente detalle

INSTALACIÓN DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA EDIFICIO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	
Presupuesto de ejecución material	118.608,73 €
Gastos generales (13%)	15.419,13 €
Beneficio industrial (6%)	7.116,52 €
PRESUPUESTO SIN IVA	**141.144,38 €**
IVA (21%)	29.640,32 €
TOTAL	**170.784,70 €**
INSTALACIÓN DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA EDIFICIO DE LA AGENCIA DE LECTURA.	
Presupuesto de ejecución material	20.186,73 €
Gastos generales (13%)	2.624,27 €
Beneficio industrial (6%)	1.211,20 €

PRESUPUESTO SIN IVA	**24.022,20 €**
IVA (21%)	5.044,66 €
TOTAL	**29.066,86 €**
INSTALACIÓN DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA EDIFICIO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL	
Presupuesto de ejecución material	37.306,07 €
Gastos generales (13%)	4.849,79 €
Beneficio industrial (6%)	2.238,36 €
PRESUPUESTO SIN IVA	**44.394,22 €**
IVA (21%)	9.322,79 €
TOTAL	**53.717,01 €**

Cada uno de los cuales comprende básicamente

- Desmontaje en su totalidad de termos eléctricos actuales.
- Desmontaje en su totalidad de equipos de aire acondicionados actuales, tanto compresores exteriores como splits interiores.
- Instalación y ejecución de nuevas canalizaciones.
- Adaptación de la instalación eléctrica.
- Instalación de bomba de calor del sistema de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria.
- Instalación de circulador del sistema de aerotermia para la producción de calefacción y refrigeración.
- Instalación de depósitos indicados y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la aerotermia.
-

SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación, que contiene el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirá la contratación de las OBRAS DE INSTALACIÓN DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA EN LOS EDIFICIOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, AGENCIA DE LECTURA Y LUDOTECA, incluida en el PROGRAMA DUS 5000, que se dividirá en tres lotes por las cuantías y financiación según se detalla a continuación .

LOTE 1: INSTALACIÓN DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA EDIFICIO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	
Subvención Programa DUS 5000 (72%)	122.966,59 €
Fondos propios Ayuntamiento (28%)	47.818,11 €
Total proyecto	**170.784,70 €**

LOTE 2: INSTALACIÓN DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA EDIFICIO DE LA AGENCIA DE LECTURA.	
Subvención Programa DUS 5000 (64,51%)	18.750,37 €
Fondos propios Ayuntamiento (35,49%)	10.316,49 €
Total proyecto	**29.066,86 €**
LOTE 3: INSTALACIÓN DE AEROTERMIA AIRE-AIRE Y AIRE-AGUA, PARA EDIFICIO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL	
Subvención Programa DUS 5000 (40,24%)	21.613,45 €
Fondos propios Ayuntamiento (59,76%)	32.103,56 €
Total proyecto	***53.717,01 €***
RESUMEN TOTAL LICITACIÓN sin IVA	***209.560,80***
IVA	***44.007,77***
TOTAL LICITACIÓN CON IVA	***253.568,57***
FINANCIACIÓN TOTAL DUS 5000 PRTR	***163.330,41€ (58,91%)***
FINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO	***90.238,16e (41,09%)***

A realizar mediante procedimiento abierto simplificado, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 y concordantes de la LCSP.

TERCERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del referido expediente señalando como plazo para presentación de ofertas el de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

CUARTO. Aprobar el gasto correspondiente a la ejecución de las obras con cargo a las aplicaciones presupuestarias.

425 609 01 AEROTERMIA AUDITORIO

425 609 02 AEROTERMIA AGENCIA LECTURA

425 609 03 AEROTERMIA LUDOTECA

QUINTO. Publicar en el perfil del contratante toda la documentación integrante del expediente de contratación, en particular la memoria justificativa, el pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar disponible el día de la publicación del anuncio de licitación.

SEXTO. Hacer público el presente acuerdo de conformidad con la legislación vigente.

Vista la propuesta y habiendo sido dictaminada favorablemente por la comisión de Urbanismo, se acuerda por unanimidad, con el voto favorable de las 2 concejalas del PSOE, 2 concejales del PP Y 1 de VOX , concejalas 1 de AEVA Y 1 No Adscrita, y Sra Alcaldesa , la propuesta transcrita con anterioridad en todos los extremos planteados.

QUINTO.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE ACERCAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNDO RURAL.

Se informa al pleno del contenido del escrito remitido por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Secretaria de Estado de Política Territorial, sobre la conveniencia y necesidad de acercar la administración a los ciudadanos, permitiéndoles hacer trámites desde la población sin tener que desplazarse. Informado el pleno y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, con el voto favorable de las 2 concejalas del PSOE, 2 concejales del PP Y 1 de VOX, concejalas 1 de AEVA Y 1 No Adscrita, y Sra Alcaldesa , su aprobación en todos los términos expuesto y que en resumen, resulta:

1. Manifestar la voluntad de este ayuntamiento de adhesión al convenio suscrito en fecha 17 de noviembre de 2022 entre la Administración General del Estado (Administración de Política Territorial) y la Federación Española de Municipios y Provincias, para la puesta en marcha de un proyecto de acercamiento de la administración a la ciudadanía del mundo rural y acepta de forma incondicionada la totalidad de las cláusulas en cuanto le sea de aplicación.

2. La adhesión tiene efectos desde la fecha de inscripción del acta de adhesión en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, y perdurara durante el periodo de vigencia del citado convenio

3. Dar traslado de presente acuerdo a los órganos competentes.

SEXTO.- DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS Y ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 20 DE MARZO, 2, 16 Y 30 DE ABRIL DE 2025.

Se informa al pleno del contenido de los decretos Nº 190 al 324, el pleno se da por enterado.

Se informa del contenido de las actas de la Junta de Gobierno en sesiones celebradas los días 20 de marzo, 2, 16 y 30 de abril de 2025, el pleno se da por enterado.

SÉPTIMO. - DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DEL 1er TRIMESTRE DE 2025 Y DE CONTROL INTERNO DE 2024.

Seguidamente se informa por la secretaria – interventora del detalle del Periodo Medio de Pago de este primer trimestre de 2025:

RATIO DE OPERACIONES PAGADAS:	5,58
IMPORTE PAGOS REALIZADO:	92.227,86
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES	43,77
IMPORTE PAGOS PENDIENTES	64.192,40
PMP	21,85

El pleno se da por enterado.

Seguidamente se informa del contenido del informe resumen de la gestión económica – financiera del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers de 2024, en términos semejantes al del año anterior ; en el que se concluye:

En general la función interventora de fiscalización o intervención previa de los actos de la entidad local que han dado lugar al reconocimiento y realización de gastos, así como su inversión o aplicación en general de los fondos públicos, ha sido realizada para asegurar que su gestión se ajusta a las disposiciones aplicables, sin que se hayan observado irregularidades.

Como en el año anterior se observa que aunque los contratos menores respetan los límites del artículo 118 del RDL 9/2017 de Contratos del Sector Publico, si se dispusiera de más personal cualificado al servicio del ayuntamiento, se podrían realizar más licitaciones por los procedimientos abiertos y contratos derivados de acuerdos marco y asi cumplir con el fin excepcional de los contratos menores.

En cuanto al reconocimiento de los derechos, así como los ingresos su aplicación también ha sido realizada, sin que se hayan observado irregularidades.

A juicio de la informante como conclusión, debo decir que con los medios personales que dispone este Ayuntamiento a fecha de hoy es difícil llevar a cabo el control interno.

Es necesario elaborar un plan de acción en el que se pongan de manifiesto las deficiencias, para lo que es necesario la dotación de medios personales para su estudio, análisis y planteamiento, bien directamente o a través de externalizar el servicio.

OCTAVO.- CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO.

No hay preguntas.

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por la concejala Dña. Yolanda Marín Furio, se formulan por escrito los siguientes ruegos y preguntas:

1- Escrito a confederación para que realice limpieza en zona del barranco desde Segart a la desembocadura en el Palancia (Termino municipal del Albalat dels Tarongers).

Informa la alcaldesa que se remitirá el escrito solicitando la limpieza a la CHJ, pero sabe, porque ya se han formulado peticiones anteriores, que la CHJ dirá que la limpieza debe realizarla el ayuntamiento

2- Escrito a servicio de correos para que realice el reparto en las zonas urbanas, con empadronados igual que en el núcleo urbano.

Informa la alcaldesa que como ya se ha comentado en otras ocasiones, el reparto según instrucciones de correos es a través de buzones concentrados, descartan en las urbanizaciones el reparto puerta a puerta; pero se formulara la petición.

3- Inicio de arreglo de caminos urbanos o bacheo de los mismos, para evitar problemas de seguridad vial.

Se realizarán los bacheos que se consideren mas necesarios por su peligrosidad al tránsito rodado o peatonal.

4- Inventario de caminos urbanos del término municipal. Para delimitar ubicación y denominación de los mismos.

Se realizarán los posibles, dentro de los recursos con los que cuenta el ayuntamiento.

5- Propuesta de Denominación de los 10 caminos de Segart, indican que aportaran plano catastral:

A- CAMÍ LLIRI SLVESTRE
B- CAMÍ DEL TARONGER
C- CAMÍ DEL LLIMONER
D- CAMÍ DEL PI ALT
E- CAMÍ DE LA ROSA
F- CAMÍ DEL LLORER
G- CAMÍ DEL MONTBLANC
H- CAMÍ DE LES GARROFERES
I- CAMÍ DE L'ESPIGOL
J- CAMÍ DE LES CALES

Se atenderá la petición

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. alcaldesa se cierra la sesión, siendo las 19,30h, de la que yo como secretaria doy fe, y para constancia de lo actuado se extiende la presente acta que se somete a la firma de la Sra. alcaldesa.

Vº Bº

LA ALCALDESA — LA SECRETARIA-INTERVENTORA

Fdo: Maria Asensi Ferrus — Fdo: Amparo Ferrandis Prats